



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

REVISIÓN FISCAL 5/2007

PARTE ACTORA:

PARTE RECURRENTE:

ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE
CUERNAVACA DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

RF 5-2007 2TCHAFIC

MAGISTRADO PONENTE:
DR. ARTURO ITURBE RIVAS.

SECRETARIA:
LIC. IVETH LÓPEZ VERGARA.

México, Distrito Federal; acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de veintiséis de abril de dos mil siete.



TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
PRIMER CIRCUITO

VISTOS; Y,

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de agosto de dos mil cuatro, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, [REDACTED] por propio derecho, demandó la nulidad de la resolución de veintiuno de febrero de dos mil tres, a través de la cual la Titular de la Administración Local Jurídica de Cuernavaca del Sistema de Administración Tributaria, declara infundado el recurso de revocación interpuesto en contra de la diversa

resolución de tres de julio del dos mil dos, por virtud de la cual el Administrador Local de Auditoría Fiscal de Cuernavaca le determinó un crédito fiscal equivalente a \$103,409.53 (ciento tres mil cuatrocientos nueve pesos 53/100 moneda nacional) por concepto de incumplimiento de obligaciones en materia de impuesto sobre la renta, correspondientes al ejercicio de dos mil.

SEGUNDO. Por acuerdo de uno de octubre de dos mil cuatro, la Magistrada Instructora de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a quien correspondió conocer del asunto, admitió la demanda, registrándola bajo el número 24695/04-17-10-2; ordenó emplazar a las autoridades demandadas y, seguidos los trámites de ley, el uno de febrero de dos mil seis, dictó la sentencia correspondiente, de conformidad con los siguientes puntos resolutivos:

"I. Ha resultado infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento que hacen valer las autoridades demandadas, en consecuencia; II. No es de sobreseerse el presente juicio. III. La parte actora probó su pretensión, en consecuencia; IV. Se declara la nulidad de la resolución impugnada así como de la recurrida, las cuales han quedado identificadas en el resultando primero del presente fallo. V. Notifíquese".

TERCERO. En desacuerdo con dicho fallo, las autoridades demandadas interpusieron recurso de revisión en términos del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, que fue resuelto por este tribunal el dieciséis de junio del año próximo pasado, declarándolo procedente y fundado.



En cumplimiento a tal determinación, la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dictó una nueva sentencia el doce de julio de dos mil seis, en la que declaró la nulidad del acto impugnado.

CUARTO. Inconforme con la anterior resolución, la Administración Local Jurídica de Cuernavaca del Sistema de Administración Tributaria, titular de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de las autoridades demandadas, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer por razón de turno a este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y por auto de su Presidente de once de enero del año en curso, se tuvo por presentado y se formó el toca R.F. 5/2007.

QUINTO. Mediante proveído de diecinueve de enero del año en curso, encontrándose los autos en estado de resolución, fueron turnados al magistrado ponente para la formulación del proyecto de resolución respectivo; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer del presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción V, de

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 248 del Código Fiscal de la Federación.

SEGUNDO. El recurso fue presentado en tiempo, toda vez que la sentencia impugnada se notificó a las autoridades demandadas a quienes representa la recurrente, el diecisiete de agosto de dos mil seis, según se advierte de las constancias que obran glosadas a fojas quinientos sesenta y quinientos sesenta y uno del juicio fiscal; actuación que surtió efectos el dieciocho del mismo mes y año, por lo que el término de quince días establecido por el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, transcurrió del veintiuno de agosto al ocho de septiembre siguientes.

En tanto que el escrito de agravios correspondiente se presentó en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el ocho de septiembre pasado y, por consiguiente, dentro del referido plazo legal.

TERCERO. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone determinar que el medio de impugnación interpuesto es procedente, dado el criterio sostenido en la jurisprudencia 11/99 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, página doscientos cuarenta, que dice:

“REVISIÓN FISCAL. PROCEDE, CONFORME AL ARTÍCULO 248, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1997, POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ASUNTO SE REFIERA A UNA RESOLUCIÓN



EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO O POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES Y SIEMPRE QUE SE INTERPONGA DENTRO DEL PLAZO LEGAL. El examen de la evolución histórica y la interpretación sistemática de los diversos textos que ha tenido el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, a partir del año de mil novecientos ochenta y ocho, que determina la procedencia del recurso de revisión fiscal, revela que tratándose de las hipótesis específicas de procedencia que establece en las fracciones III, IV y V de su texto vigente a partir del 1o. de enero de 1997, no se requiere la reunión de los requisitos de cuantía y razonada importancia y trascendencia, que están señalados en las fracciones I y II del mismo artículo 248, prueba de este aserto es que la parte final del párrafo primero del mismo precepto legal señala: 'siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos', expresión que en su sentido se encuentra determinada por el término 'cualquiera' que según la gramática castellana es un pronombre indeterminado que denota una persona indeterminada 'alguno, sea el que fuere', lo que otorga individualidad a cada una de las hipótesis que en sus cinco fracciones prevé el citado artículo. Por consiguiente, tratándose de la fracción III del artículo 248, la procedencia del recurso de revisión fiscal se encuentra determinada por la naturaleza u origen de la resolución que haya sido materia de examen en la resolución o sentencia definitiva impugnada, que debe ser una resolución emitida por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, requisito con el que sólo converge el relativo al plazo legal de interposición del recurso”.

CUARTO. La sentencia recurrida se basó en las consideraciones que se transcriben a continuación:

“PRIMERO. La ejecutoria que se cumplimenta en su parte conducente de los considerandos resolvió: '(se transcribe)'--- SEGUNDO. Ahora bien, la sentencia de fecha 01 de febrero del 2006, se dejó insubsistente mediante acuerdo del 3 de julio del 2006, por lo que esta Sala en términos de lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y en cumplimiento a dicha ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, procede a emitir una nueva, atendiendo a los lineamientos señalados en la ejecutoria que nos ocupa.--- TERCERO. En virtud de que la impugnación de la resolución impugnada que ha quedado precisada en el resultando primero del presente fallo, se realizó de conformidad con lo preceptuado en el artículo 209 bis, fracción I del Código Fiscal de la Federación, dado que la actora controvierte la constancia de notificación y citatorio previo; esta Sala procede al estudio de los conceptos de impugnación primero del escrito de demanda, así como las constancias que integran el expediente en que se actúa, en correlación con la causal de improcedencia y sobreseimiento que hacen valer las autoridades



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

demandadas en su contestación de demanda, por encontrarse estrechamente relacionados, en los siguientes términos: 1) Como ya quedó precisado con anterioridad, el actor en la demanda de nulidad realizó la impugnación del oficio 325-SAT-17-04-0908, de fecha 21 de febrero de 2003, emitido por la Titular de la Administración Local Jurídica de Cuernavaca, que ha quedado detallada en el resultando primero del presente fallo, así como su constancia de notificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 209-bis, fracción I del Código Fiscal de la Federación, aduciendo la ilegalidad del acta de notificación y citatorio respectivos.--- 2) Las autoridades demandadas al formular su contestación de la demanda aducen que la constancia de notificación y citatorio previo fueron legalmente diligenciados, cumpliendo con los requisitos previstos por los artículos 134 al 137 del Código Fiscal de la Federación, documentos que obran a fojas 60-61 y 331-332 de autos.-- El numeral que se analiza, en lo conducente a letra dice: '(transcribe)'.--- Acorde con lo señalado en la ejecutoria que nos ocupa y por lo que respecta al argumento del actor en el sentido que el citatorio que precedió a la diligencia de notificación es ilegal, al no haberse señalado en forma correcta la fecha en que fue elaborado el mismo, ya que la cita que pretende hacerse, es para un día que ya transcurrió, violando así con lo dispuesto por el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, es de indicarse que el error en la cita de la fecha del citatorio no conlleva la ilegalidad del mismo porque en la parte final de éste se exhortó a que esperara al notificador el día diecinueve de marzo de dos mil tres, fecha en la que efectivamente se llevó a cabo la diligencia de

notificación.--- Ahora bien, independientemente del argumento anterior el demandante adicionalmente manifiesta que la notificación a estudio es ilegal ya que en el citatorio que precedió a la notificación de la resolución impugnada se requirió la presencia de su representante legal, sin que jamás hubiera procedido a requerir su presencia, situación a la que se encontraba obligado el notificador al ser el contribuyente a notificar una persona física.--- Así pues, del análisis que se realiza a tal citatorio aportado como medio de prueba por el actor, mismo que se tiene a la vista por obrar a fojas 60 de autos, se desprende que efectivamente el notificador adscrito a la Administración Local Jurídica del Norte del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, no requirió directamente la presencia del interesado, es decir, [REDACTED], sino que como se advierte del referido citatorio se requirió directamente la presencia del representante legal, para lo cual se pasa a transcribir la parte conducente del mismo: '(transcribe)'

- En efecto no pasa desapercibido para esta Décima Sala que a quien se debía notificar la resolución impugnada era a [REDACTED] quien resulta ser una persona física, por lo que en tal sentido resulta ilegal el que el notificador hubiera requerido directamente la presencia de su representante legal, cuando al tratarse de una persona física se debió requerir directamente su presencia, ya que en la especie no nos encontramos en la presencia de una notificación practicada a una persona moral y en la que sí resulta factible requerir la presencia de su representante legal, sin que sea óbice a lo anterior lo manifestado por las demandadas en el sentido de que no resulta ilegal el que se requiera al representante legal



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

35
FORMA-A-55
R.F. 5/2007

sín que previamente se requiera la presencia del destinatario, lo cual no torna ilegal la notificación pues se puede requerir al destinatario o su representante legal, pues en primer término no acreditan en la presente instancia que [REDACTED] tenga un representante legal y con el cual debía entenderse la diligencia de trato, y en segundo término tal actuación deja en estado de indefensión al actor pues al tratarse de una diligencia que debía entenderse directamente con él, se pretendió diligenciar con un supuesto representante legal, que se insiste, no necesariamente puede existir en tratándose de personas físicas, lo cual obviamente sí ocurre con las personas morales, situación ante la que naturalmente no nos encontramos.--- De esta manera, se tiene que el artículo 134 del código tributario, prevé las modalidades bajo las cuales pueden diligenciarse las notificaciones de los actos administrativos, y por su parte el artículo 137 del mismo código, establece como una de las formalidades por medio de las cuales se deben realizar las notificaciones de dichos actos administrativos, que se realicen personalmente y, el notificador no encuentre a quien deba notificar o a su representante legal, el dejar citatorio en el domicilio, para que espere a una hora fija del día hábil siguiente, y sólo ante el incumplimiento al citatorio en cuestión, se podrá practicar la diligencia con quien se encuentre en el domicilio del interesado.--- Siguiendo el mismo orden, en términos a lo establecido por los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, cuando el notificador acuda al domicilio del interesado y no encuentre a éste, debe requerir su presencia, de no encontrarlo, dejarle citatorio para que lo espere a hora determinada del día

hábil siguiente, y que al constituirse de nueva cuenta en el domicilio del interesado, debe requerir expresamente por la presencia del interesado, debiendo asentar tal situación en el acta que para tales efectos levante.--- Ahora bien, en relación al requisito de diligenciar la entrega del citatorio para la espera de una hora fija al día hábil siguiente, evidentemente no se acredita en la presente instancia, que en el mismo se hubiera hecho constar que se requirió la presencia del interesado y que en la especie resulta ser [REDACTED], dejándose de cumplir con ello los requisitos que para la validez de la notificación de los actos administrativos, ha determinado el Poder Judicial de la Federación, en la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe: 'NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA FISCAL. REQUISITOS CUANDO NO SE ENCUENTRA A QUIEN SE DEBE NOTIFICAR. (transcribe)'.--- En ese orden de ideas, este cuerpo colegiado estima que las autoridades demandadas no acreditan la legal notificación de la resolución impugnada en el presente juicio, estando obligadas a ello, en términos de lo dispuesto por el artículo 209-bis del Código Fiscal de la Federación previamente citado, en consecuencia se desestiman sus argumentos y esta Sala determina que dicha resolución no fue notificada conforme a derecho, teniéndose por presentada la demanda de nulidad en tiempo.--- Bajo esa tesis, la causal de improcedencia que hacen valer las autoridades demandadas en su contestación, prevista en el artículo 202 fracción IV, en relación con el 203, fracción II del Código Fiscal de la Federación no se actualiza, ya que al haberse demostrado que la notificación de fecha 19 de marzo de 2003, no se diligenció conforme a



derecho, evidentemente que el término de los 45 días a que se refiere el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, no puede computarse a partir de dicha fecha, sino de aquélla en que se haya hecho sabedor el enjuiciante de la resolución impugnada.--- Como se desprende del capítulo de hechos punto 11 del escrito de demanda, el enjuiciante aduce que tuvo conocimiento de la resolución impugnada en el presente juicio el 05 de agosto de 2004, por lo que es a partir de ese momento que debe de iniciarse el cómputo de los cuarenta y cinco días, siendo evidente que al haber presentado su escrito de demanda el 20 de agosto de 2004, como se advierte del sello de recibido que obra a foja 01 de autos, la misma se encuentra en tiempo, resultando infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer por las autoridades demandadas, por lo que no es de sobreseer y no se sobresee el presente juicio.---

CUARTO. Por cuestión de técnica procesal y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, esta Sala procede al análisis del concepto de impugnación identificado como séptimo, en donde la parte actora medularmente manifiesta que la resolución recurrida es ilegal, al encontrarse indebidamente fundada y motivada, al haberse llevado a cabo una determinación presuntiva de sus ingresos, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 56, fracción III y 59, fracción VII del Código Fiscal de la Federación, sin precisar en qué supuesto de los previstos por el artículo 55 del ordenamiento citado es que se colocó el enjuiciante.--- Aduce el enjuiciante que el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación, establece los supuestos en que resulta procedente llevar

a cabo la determinación presuntiva de la utilidad fiscal, resultado fiscal o remanente distribuible según sea el caso, así como sus ingresos, entradas y valores de los actos o actividades por las que deban pagarse contribuciones.--- Las autoridades demandadas, al formular su contestación manifiestan que lo aducido por el actor resulta infundado en virtud de que las autoridades en ningún momento pretenden dar el carácter de ingresos a las aportaciones realizadas a una sociedad anónima, sino a lo que se le pretende dar el carácter de ingresos es a la información aportada por terceros en cantidad de \$1,171,000.00, de conformidad con los artículos 59 primer párrafo, fracción II y 56, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación, derivado de la documentación proporcionada en la visita domiciliar de aportación de datos por terceros practicada a la empresa [REDACTED].

Señalan las autoridades demandadas que resulta incorrecta la apreciación del actor, en virtud de que no se está llevando a cabo ninguna determinación presuntiva en los términos del artículo 56, fracción III del Código Fiscal de la Federación, por lo que no resulta aplicable el artículo 55 del ordenamiento citado, dado que la determinación de la declaración de sus ingresos derivó de la revisión practicada a las declaraciones presentadas, libros de ingresos, estados de cuenta bancarios de los meses de enero a diciembre de 2000 y notas de venta por los meses de agosto a diciembre de 2000, así como de la aportación de datos de terceros.--- Que para comprobar los ingresos las autoridades presumieron en términos de lo dispuesto por el artículo 56 primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación, que la información



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

37
FORMA-A-66
R.F. 5/2007

proporcionada por el tercero eran operaciones realizadas por el enjuiciante, por lo que no tenía obligación de colocarlo en alguno de los supuestos previstos por el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación.--- Siguen apuntando las demandadas que el enjuiciante tampoco se coloca en el supuesto previsto por el artículo 59, fracción VII del Código Fiscal de la Federación, dado que las aportaciones a sociedad anónima no constituyen una salida, pues su patrimonio no se ve afectado por lo que dicho argumento resulta inoperante.--- En criterio de los magistrados que integran esa Sala, el concepto de impugnación que se analiza resulta fundado y suficiente para declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, así como de la recurrida, con apoyo en las siguientes consideraciones: --- En el concepto de impugnación que ha quedado previamente resumido, la parte actora manifiesta que la resolución recurrida, consistente en el oficio 324-SAT-17-2-a-6194, de fecha 03 de julio de 2002, es ilegal, por encontrarse indebidamente fundado y motivado, ya que para llevar a cabo la determinación presuntiva de sus ingresos, las autoridades demandadas debieron en principio determinar en qué supuestos de los previstos por el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación, es el que se actualiza.--- Al respecto las autoridades demandadas al formular su contestación manifiestan que en la resolución recurrida no se llevó a cabo el procedimiento de determinación presuntiva, por lo que para dilucidar este punto, es necesario remitirse al contenido de la resolución recurrida, la cual obra a fojas 95-110 de autos, que en lo conducente establece: '(transcribe)'.--- Del contenido de la resolución recurrida se advierte que

contrario a lo aducido por las autoridades demandadas en el presente caso se llevó a cabo la determinación presuntiva de los ingresos del enjuiciante, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 primer párrafo fracción III y 56 primer párrafo fracción III del Código Fiscal de la Federación, al haber sido citados como fundamento de la misma y no como una simple referencia, ya que al formar parte del cuerpo de dicha resolución, en los términos en que fueron citados, como sustento de las determinaciones a que las enjuiciadas llegaron, numerales que en lo conducente establecen: '(transcribe)'.--- Los numerales transcritos establecen el primero de ellos, el procedimiento a seguir para llevar a cabo la determinación presuntiva prevista en el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación y el segundo, hace referencia la presunción que genera los depósitos de la cuenta bancaria del contribuyente, que no corresponda a sus registros contables, en la comprobación de los ingresos.--- Bajo esa tesitura, al haber sido citados como parte del fundamento de la resolución recurrida, a través de la cual se lleva a cabo la determinación de los ingresos del enjuiciante en un monto superior al declarado, resulta evidente que en la especie sí se aplicó la determinación presuntiva para llevar el cálculo de dichos montos, sin que esta Sala pierda de vista lo aducido por las autoridades demandadas en cuanto a que para la obtención de las cantidades de ingresos no declarados, se tomó como base la documentación e información obtenida por terceros, ya que como de igual forma se desprende del contenido del acto recurrido, dicho supuesto se encuentra previsto en el artículo 56, fracción III del Código Fiscal de la Federación, generando

la convicción del procedimiento utilizado en el mismo.--- Una vez precisado lo anterior, se procede a dilucidar si en el presente caso, al haberse llevado a cabo la determinación presuntiva de los ingresos, era necesario que se citara el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación y se motivara en cuál de todos los supuestos que contempla es el que se actualiza o se coloca la parte actora. El numeral aducido establece: '(transcribe)'.--- El artículo transcrito establece la facultad de las autoridades demandadas para llevar a cabo la determinación presuntiva de la utilidad fiscal de los contribuyentes, el resultado fiscal en el régimen simplificado o el remanente distribuible de las personas que tributen conforme al título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sus ingresos, entradas y el valor de los actos, actividades o activos, por los que deban pagar contribuciones cuando se coloquen en alguno de los supuestos contenidos en las fracciones que lo comprenden.--- Lo anterior, deja en evidencia que para que las autoridades demandadas puedan llevar a cabo el ejercicio de la facultad referida, deben en principio determinar que se actualiza alguno de los supuestos que contempla el numeral citado, las cuales se encuentran previstos en cada una de sus fracciones, para que de ese modo se pueda justificar su actuación.--- En esos términos, resulta fundado el argumento de la parte actora, en virtud de que las autoridades demandadas tenían la obligación de citar el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación y motivar en qué supuesto es el que se colocó, para poder de ese modo determinar que su actuación se llevó conforme a derecho, dado que como lo establece el artículo 56 del ordenamiento

aludido, el mismo resulta aplicable en los casos en que se lleve a cabo el procedimiento de determinación presuntiva a que se refiere el primer artículo citado.--- Ahora bien, se debe dejar en claro que el artículo 56 del Código Fiscal de la Federación, establece el procedimiento que debe seguirse para el cálculo de los ingresos cuando se lleve a cabo una determinación presuntiva de la utilidad fiscal, resultando fiscal o remanente distribuible según sea el caso y el artículo 59 del mismo ordenamiento prevé la presunción que debe considerarse cuando se lleve a cabo la comprobación de los ingresos, siendo que ambos ordenamientos se encuentran ligados al procedimiento de determinación presuntiva, tomando en cuenta que con anterioridad a la reforma al Código Fiscal de la Federación, publicada el 31 de diciembre de 1998, se consideraba como dos procedimientos distintos, al estar contemplado el primero de ellos en el artículo 58, que al quedar derogado y referirse ambos dispositivos a los procedimientos que deben seguirse para la comprobación de los ingresos y las presunciones que deben generarse respecto a la contabilidad, datos e informes con los que se cuente al momento de llevar a cabo el ejercicio de las facultades de comprobación, se llega a la conclusión de que ambos se encuentran estrechamente relacionados con el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación, de ahí la necesidad de que se funde y motive en qué supuesto es el que se colocó la enjuiciante para encontrarse sujeto a la determinación presuntiva. Al caso esta Sala comparte el criterio emitido por el Poder Judicial, cuyos datos de identificación y contenido se transcriben:

'DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE UTILIDAD FISCAL,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

INGRESOS Y VALOR DE ACTIVIDADES. LOS ARTÍCULOS 55 Y 59 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SE COMPLEMENTAN. (transcribe)'.--- En virtud de lo anterior, para poder determinar en forma presuntiva los ingresos de la parte actora, las autoridades que emitieron la resolución recurrida, se encontraban obligadas a fundar y motivar correctamente la conducta que originó la actualización de alguno de los supuestos previstos por el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación, sin que pueda llegar a considerarse que existe una omisión en estos requisitos, sino una indebida fundamentación y motivación, ya que en el cuerpo del acto materia del recurso de revocación, sí se citaron preceptos y se señalaron los motivos de la determinación, siendo indebida, aunado a que dichos ordenamientos se refieren a cuestiones sustantivas, al contemplar la forma y los procedimientos para llevar a cabo el cálculo de la base de la contribución supuestamente omitida.--- Por lo tanto, esta Sala concluye que lo procedente es declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, así como de la recurrida, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 fracción IV del Código Fiscal de la Federación.--- Esta Sala se abstiene de realizar el estudio de los restantes conceptos de impugnación, ya que cualquiera que fuera el resultado de los mismos en nada variarían el presente fallo.--- En mérito de lo expuesto y con apoyo en los artículos 105 de la Ley de Amparo, 202, fracción IV, 236, 237, 238, fracción IV y 239, fracción II del Código Fiscal de la Federación, en relación con el cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es de resolverse y se resuelve: I. Ha resultado infundada la causal de

improcedencia y sobreseimiento planteada por las autoridades demandadas, en consecuencia; II. No es de sobreseerse y no se sobresee el presente juicio.--- III. La parte actora probó su pretensión, en consecuencia; IV. Se declara la nulidad de la resolución impugnada, la cual ha quedado precisada en el resultando primero del presente fallo.--- V. En vía de informe con atento oficio que al efecto se gire, remítase copia de la presente sentencia al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en testimonio del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en la revisión número R.F. 148/2006.--- VI. Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a las autoridades demandadas”.

QUINTO. La autoridad recurrente expresó los siguientes agravios:

“PRIMERO. Violación a lo dispuesto en el artículo 237, del Código Fiscal de la Federación, por inexacta e indebida aplicación.--- Violación a lo dispuesto en los artículo 202, fracción IV, 207 primer párrafo, 209-bis, todos del Código Fiscal de la Federación, por inobservancia.--- Violación al artículo 192 de la Ley de Amparo, por inobservancia.--- Como lo dispone el artículo 237, del Código Fiscal de la Federación, las sentencias emitidas por las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, deberán fundarse en derecho, lo que en la especie la a quo no realizó debido a que violentó el principio de congruencia de las sentencias, principio que en esencia está referido a que las mismas sean congruentes no sólo consigo mismas sino también con la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

40
FORMA A-55
R.F. 5/2007

litis.--- De una correcta interpretación del artículo (sic) Código Fiscal de la Federación que, en lo conducente, dispone que al dictar una sentencia el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o sus Salas 'se fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado', pudiendo 'examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación', se advierte que aquéllos tienen la obligación ineludible al estudiar los conceptos de anulación planteados en el libelo, de considerar las razones vertidas por las autoridades en su contestación, de no hacerlo, esa omisión hace incongruente el fallo en términos de ese precepto, motivo por el que si en el caso la Sala fiscal para pronunciar su sentencia tomó en cuenta que en el citatorio de 28 de marzo de 2003, no se requirió la presencia del destinatario o sea, [REDACTED] y en su lugar se indicó 'se requiere la presencia de su representante legal', siendo que dicha persona física no tenía representante legal, motivo por el cual era incorrecta la circunstanciación del citatorio en comento, al requerirse la presencia del representante legal de tal persona, sin hacer alusión al contribuyente, ello no conlleva la ilegalidad del mismo.--- Porque se trató de la misma persona; es decir, [REDACTED] al no tener representante legal alguno; corrobora que la notificación de la resolución impugnada practicada en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, conlleva a que se cumplió el objetivo de la notificación, es decir, dar a conocer al destinatario del acto de

molestia emitido por la autoridad; máxime si se tiene en cuenta que, por lo demás, la notificación se ajustó a las formalidades previstas en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación.--- Sin embargo, no consideró lo mismo la Sala fiscal al resolver a hojas 6, 7, 8, 9 y 10 de la sentencia que se recurre, como se advierte de la siguiente transcripción: (transcribe).--- Sin embargo, la Sala fiscal no observó al argumento manifestado por la autoridad vía contestación consistente en: 'En cuanto a que el citatorio no fue dirigido a [REDACTED] por lo que debió requerir la presencia del destinatario y no del representante legal, es de manifestar que sus argumentos son infundados, debido a que como esa Sala podrá advertir del escrito por el cual presentó el recurso de revocación, el promovente indicó como domicilio para oír y recibir notificaciones la casa marcada con el No. [REDACTED] de la calle de [REDACTED] Col. [REDACTED] en [REDACTED] en ese sentido, si el propio actor indicó en su promoción cuál iba a ser su domicilio procesal es inaudito que en él estuviera presente [REDACTED] al no ser éste su domicilio fiscal, por lo tanto, al no encontrarse se tenía que buscar a su representante legal situación que quedó circunstanciada en el citatorio y acta de notificación'.--- En esas circunstancias, la conclusión alcanzada por la Sala juzgadora en su sentencia parte de no haber analizado los argumentos de defensa manifestados por la autoridad demandada, lo que es violatorio en su conjunto del artículo 237, del Código Fiscal de la Federación y los principios de exhaustividad y congruencia que deben regir a toda sentencia.--- 'CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. SUS ASPECTOS. EL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES EL QUE LO CONTIENE.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55
R.F. 5/2007

(transcribe)'.--- Asimismo, no observó que la notificación cumplió con los requisitos definidos por la jurisprudencia previstos en la jurisprudencia 40/2006, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que ha definido las formalidades que deben observarse tratándose de notificaciones personales, al tenor siguiente: 'NOTIFICACIÓN PERSONAL. EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER LAS FORMALIDADES PARA SU PRÁCTICA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. (transcribe)'.--- De lo resuelto por el tribunal supremo, se desprenden los requisitos a reunir en las actas de notificación que se practiquen en forma personal por las autoridades fiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación: 1. En la constancia de notificación se asentará cuál es la persona que se busca.- 2. Cuál es su domicilio; en su caso, porqué no pudo practicarla, 3. Con quién entendió la diligencia y, a quién le dejó el citatorio.--- Requisitos que se colmaron en el caso de la notificación referida, ya que en cuanto al primer supuesto, se indicó en el citatorio de fecha 28 de marzo de 2003 y acta de notificación de fecha 19 de marzo de 2003, que el nombre de la persona buscada es [REDACTED]--- Por cuanto al segundo requisito, se indicó el domicilio para oír y recibir notificaciones señalado en el recurso de revocación, el ubicado en: [REDACTED] con número exterior [REDACTED] Col. [REDACTED] C.P. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]--- Respecto al requisito de indicar porqué no se pudo practicar la diligencia con el destinatario, se indicó en el citatorio de fecha 28 de marzo de 2003, por no haberlo encontrado.--- Y por último por cuando al requisito de

Indicar en con quién entendió la diligencia y, a quién le dejó el citatorio, se mencionó en el citatorio de fecha 28 de marzo de 2006, que entendió la diligencia con [REDACTED] y que el citatorio se dejaba en poder de esa persona.--- Por eso es válido considerar que si el citatorio fue dirigido a [REDACTED], y la diligencia se practicó en el domicilio indicado para oír y recibir notificaciones, ubicado en la casa marcada con el No. [REDACTED] de la Calle de [REDACTED] Col. [REDACTED] en [REDACTED], en ese sentido, si el propio actor indicó en su promoción cuál iba a ser su domicilio procesal es inaudito que en él estuviera presente [REDACTED] al no ser éste su domicilio fiscal, por lo tanto, al no encontrarse se tenía que buscar a su representante legal situación que quedó circunstanciada en el citatorio y acta de notificación.--- No obstante, que no se iba encontrar en tal domicilio, en nada afecta la esfera jurídica de la demandante con haberse indicado en el citatorio que se requería la presencia del representante legal, si de la jurisprudencia invocada en párrafos anteriores, podemos advertir que el alto tribunal no definió como requisito de legalidad para la práctica de notificaciones personales, aquél que se refiere a requerir la presencia del destinatario, tan sólo arribó el tribunal supremo al requisito consistente en que se indique el motivo por el cual no se entendió con el destinatario, el cual sí se cumplió cabalmente, evidenciándose así la violación al artículo 192 de la Ley de Amparo, pues la conclusión adoptada por la Sala fiscal se aparta de lo resuelto por el alto tribunal.--- Lo anterior aunado a que pasó desapercibido la Sala a quo que sí se cumplió con requerir la presencia, pero que



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA-A-55

R.F. 5/2007

sólo constituye un error al momento de asentar el nombre de la contribuyente, el hecho de haber mencionado 'representante legal' en lugar del nombre del contribuyente, que no afecta la legalidad de notificación, pues contrariamente a lo determinado por la sala contenciosa administrativa, se trato de la misma persona; es decir, [REDACTED]; máxime si se tiene en cuenta que, por lo demás, la notificación se ajustó a las formalidades previstas en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación.--- Como se ve, en el citatorio de fecha 28 de marzo de 2003, existen los datos que permiten considerar legal la notificación de la resolución impugnada, como el nombre de la persona que busca, el domicilio en que se debía practicar la notificación, el motivo por el cual no se pudo practicar con el destinatario, el nombre de la persona con quien se entendió la diligencia y, quien se le dejó el citatorio.--- En ese sentido, la Sala fiscal debió estimar que la circunstancia de que el personal de la autoridad fiscal hubiese asentado en el citatorio de notificación que inquirió al representante legal del contribuyente, constituye solamente un error al momento de asentar el nombre del destinatario, que no afecta la legalidad de la notificación, en el entendido de que la diligencia se llevó a cabo en el domicilio señalado por el contribuyente al promover su recurso de revocación, pues contrariamente a lo determinado por la Sala contenciosa administrativa, se trató de la persona física, si consideramos que efectivamente no tiene representante legal [REDACTED]; máxime si se tiene cuenta que, por lo demás, la notificación se ajustó a las formalidades previstas en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación.--- De lo

que se sigue, que si al haberse cumplido con los requisitos definidos en la jurisprudencia 40/2006, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, igualmente concluyó que no era legal la notificación en comento, con ello contraviene lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo.--- Aún más, se aparta la consideración de la Sala a quo relativa a que el requerimiento de la presencia del destinatario sólo podía efectuarse a la persona física y no a su representante legal, ya que de la lectura al artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, podemos apreciar que ni por asomo el legislador incluyó el requisito de 'requerir la presencia de la persona a quien se busca', luego retomando lo argumentado en la contestación en cuanto a que la diligencia de notificación se practicó en el domicilio para oír y recibir notificaciones, lugar en el que no se iba a localizar al contribuyente sino a su autorizado para tal efecto, es lógico considerar que al haberse cumplido con requerir la presencia del representante legal de la actora, no se torna ilegal la diligencia en comento, pues se cumplió con el requisito de 'requerir' y con ello se acata la formalidad invocada por la Sala fiscal con apoyó en la jurisprudencia III.2o. A. J/2, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, Enero, visible a página 81.--- Considerar lo contrario conlleva a ignorar el cumplimiento de una formalidad que aun cuando no se encuentra prevista en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, sí se observó en la diligencia de notificación de la resolución impugnada, poniendo de manifiesto la incongruencia cometida en la sentencia

recurrída, pues pretende dejar de lado que se debe requerir la presencia de la persona quien se busca, y al haberse cumplido con requerir la presencia del representante legal cumple la autoridad fiscal con la formalidad en comento, sin importar que el destinatario del acto de molestia sea una persona física, en tanto, que la jurisprudencia invocada por la Sala a quo, en la sentencia recurrida, define que únicamente se deberá requerir la presencia de la persona a notificar y si en el caso se identificó en la parte superior del citatorio anulado, los datos del destinatario es lógico considerar que el requerimiento de la presencia estaba dirigido a él y que la mención del representante legal en la circunstanciación del citatorio en comento, corrobora que se trata de un error en la cita de la persona de quien se requirió la presencia, pero en ninguna manera significa que no se cumplió con requerir la persona a quien se buscaba para notificar, dado que sí se cumplió con la acción de 'requerir la presencia', teniéndose la obligación de considerar como un todo el contenido del citatorio controvertido.--- 'ACTAS DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. DEBEN CONSIDERARSE COMO UN TODO Y NO SÓLO ATENDER A PARTE DE ELLAS PARA PRETENDER DEMOSTRAR SU ILEGALIDAD. (transcribe)'--- 'SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU CONTENIDO Y FINALIDAD EN RELACIÓN CON LA PRETENSIÓN DEDUCIDA. (transcribe)'--- Por eso, al haberse practicado correctamente la notificación de la resolución impugnada era procedente sobreseer el juicio de nulidad en que se actuó, atendiendo a que la interposición del medio de

defensa se hizo en forma extemporánea, tal y como sostuvo esta representación fiscal en la causal de improcedencia y sobreseimiento de la contestación de demanda, así como al refutar el primer concepto de impugnación del escrito inicial de demanda.--- En ese tenor, lo procedente sería que ese tribunal colegiado revocara la sentencia que en esta vía se recurre y ordenara la emisión de otro fallo que se encuentre ajustado a derecho.--- SEGUNDO. Violación a lo dispuesto en los artículos 238 fracción IV 239, fracción II del Código Fiscal de la Federación, por indebida aplicación.--- Lo anterior es así, ya que sin previo estudio de los hechos suscitados en la revisión practicada al amparo de la orden número IPF2800001/02, contenida en el oficio número 324-SAT-17-01-375 de fecha 6 de febrero de 2002, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Cuernavaca, se resolvió declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y de la recurrida.--- Tal manera de resolver se aprecia de la foja 10 a la 20 de la sentencia que se recurre, misma que se transcribe a continuación: '(transcribe)'.--- En primer término, se aclara que no era necesario invocar alguna de las causales previstas en el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación, en consideración a que en ese precepto tan sólo se establecen los supuestos en que las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, o el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sus ingresos y el valor de actos, actividades o activos, por los que deban pagar contribuciones.--- Sin embargo, con el fin de cumplir la debida fundamentación y motivación



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORM A-55
R.F. 5/2007

del procedimiento para determinar presuntivamente los ingresos derivados de la aportación de datos por terceros, era necesario únicamente invocar el artículo 56, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, pues dicho precepto establece de manera específica ese supuesto.--- Pero la exigencia de la Sala a quo respecto a que era requisito de motivación y fundamentación, la cita del artículo 55 del Código Fiscal de la Federación, no encuentra sustento jurídico en el ordenamiento tributario que nos ocupa, tan es así, que el artículo 56 contempla de manera independiente los casos en que se determinarán presuntivamente los ingresos brutos de los contribuyentes.--- Esto es así, ya que como podrá apreciar ese tribunal de alzada no se establece como condición en la aplicación de la determinación presuntiva prevista en el artículo 56 fracción III del Código Fiscal de la Federación, la actualización de los supuestos establecidos en el artículo 55 del citado ordenamiento jurídico tributario.--- Lo cual es comprensible, pues para determinar presuntivamente los ingresos brutos de los contribuyentes apoyándose en la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente, dicha facultad puede ejercer por sí misma, sin que requiera otro supuesto de procedencia.--- Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido el criterio de que el acatamiento al principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que se establezcan en un acto formal y materialmente legislativo todos aquellos elementos que sirven de base para realizar el cálculo de una

contribución, fijándolos con la precisión necesaria que, por un lado, impida el comportamiento arbitrario de las autoridades que directa o indirectamente participen en su recaudación y, por otro, genere al gobernado certidumbre sobre qué hecho se encuentra gravado, cómo se calculará la base del tributo, qué tasa o tarifa debe aplicarse, cómo, cuándo y dónde se realizará el entero respectivo y, en fin, todo aquello que la permita conocer qué cargas tributarias le corresponden en virtud de la situación jurídica en que se encuentra o pretenda ubicarse.--- Ahora bien, el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación señala en sus diversas fracciones los supuestos en los que la autoridad puede determinar presuntivamente la utilidad fiscal, el resultado fiscal, los ingresos, las entradas y el valor de los actos, actividades o activos de los causantes, sin que por ese motivo la aplicación de los artículos 56 y 59 del Código Fiscal de la Federación queden supeditados para su aplicación al primer artículo citado.--- Al haber establecido el legislador distintas formas de determinación presuntiva en los diversos artículos 55, 56 y 59 del Código Fiscal de la Federación, podemos considerar su interdependencia para su aplicación por parte de las autoridades fiscales, toda vez que si la intención del legislador hubiera sido relacionar todas maneras de determinar presuntivamente los ingresos de los contribuyentes, habría incluido en un solo artículo los supuestos y el procedimiento para ese fin, pero en la especie el legislador se refiere a distintos supuestos en cada uno de los citados artículos y eso permite aplicar su contenido de manera aislada cuando no se suscitan los supuestos previstas en los demás artículos.--- La distinción entre la determinación



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55
R.F. 5/2007

presuntiva prevista por el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación y la determinación presuntiva establecida por el artículo 59 del mismo ordenamiento, ha sido materia de pronunciamiento por parte del Poder Judicial de la Federación, en la tesis VI.2o.A-28 A, que a la letra señala: 'DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE LAS UTILIDADES Y OPERACIONES FISCALES. LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 55 Y 59 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SON DISTINTAS Y SÓLO SE APLICA A LA PRIMERA DE ELLAS EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL DIVERSO PRECEPTO 58 DEL PROPIO CÓDIGO, VIGENTE HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. (transcribe)'.--- Del criterio que antecede, podemos advertir que no existe obligación por parte de la autoridad fiscal de ubicar la conducta de contribuyente revisado en alguno de los supuestos previstos por el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación, cuando se actualice el supuesto de determinación prevista por el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación.--- Tal y como aconteció en la especie, la autoridad invocó los artículos 56, primer párrafo fracción III y 59, primer párrafo fracción III, ambos del Código Fiscal de la Federación, para determinar presuntivamente los ingresos del contribuyente revisado, por actualizarse los supuestos en ellos previstos, sin que la a quo y la contribuyente desvirtuaran esa situación.--- Por eso, si la autoridad no consideró que el contribuyente se ubicaba en alguno de los supuestos previstos por el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación, hizo innecesario fundar y motivar el procedimiento seguido por la autoridad en ese precepto,

a fin de cumplir con una debida fundamentación del acto.--- Lo anterior, se corrobora si consideramos que el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación prevé la determinación presuntiva de la utilidad fiscal de los contribuyentes, de sus ingresos, del valor de los actos, actividades o activos por los que deban pagar contribuciones; dicha determinación presuntiva resulta de aplicar por parte de la autoridad un cálculo o estimación de las utilidades o de los ingresos de los contribuyentes o del valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, es decir, se trata de una aproximación del valor de tales utilidades, actos, actividades o ingresos, mientras que lo que regula el artículo 59 del código en cita, es que algunos datos o documentos se presume corresponden a operaciones efectuadas por el contribuyente y, por ende, forman parte de sus ingresos, de sus actos, actividades o activos, pero esto de ningún modo implica que la autoridad fiscal apoyarse (sic), en tales documentos, aportados por el propio contribuyente, realice una determinación presuntiva que deba sujetarse al procedimiento fijado en el precitado artículo 55, pues dicha autoridad no realiza un cálculo o estimación aproximado de los actos o actividades, sino que es una determinación precisa derivada de la propia documentación aportada por el contribuyente.--- De allí, es válido considerar que la resolución determinante del crédito fiscal se encuentra debidamente fundada y motivada, entendiendo que lo primero se cumple citando con precisión los preceptos legales en que se haya apoyado la autoridad para emitirlo y por lo segundo, que debe expresarse con claridad los motivos y razones que

correcto que se hubiere solicitado la presencia de su representante legal en la práctica de la diligencia.

Es de desestimarse el argumento aquí sintetizado, en atención a que, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, la Sala fiscal, al declarar la ilegalidad de la notificación del acto impugnado, se pronunció implícitamente sobre el razonamiento expuesto en la contestación de demanda a que hace referencia.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben contener el examen de todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, esto es, el estudio de los agravios expuestos por la parte actora y los argumentos planteados que den respuesta a tales agravios esgrimidos, en su caso, por las autoridades demandadas.

En el caso concreto, al presentar la demanda de nulidad, el actor se ubicó en la hipótesis que prevé el artículo 209 bis del Código Fiscal de la Federación, toda vez que tildó de ilegal la notificación de la resolución impugnada, esgrimiendo a modo de concepto de impugnación en su contra, que *“como se desprende del texto del citatorio que se analiza, el notificador requirió la presencia del representante legal del suscrito, sin que jamás hubiera procedido a requerir mi presencia, situación a la que se encontraba obligado al ser el contribuyente a notificar una persona física; de ahí que resulte inapropiado el que en tal documento se establezca que ‘al no haberlo encontrado a usted ni a su representante legal...’, pues lo cierto es que como se acredita con el propio documento,*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA-55
R.F. 5/2007

jamás se requirió mi presencia para la práctica de la notificación correspondiente, siendo ella una razón más por la cual el citatorio de 28 de marzo de 2003 es ilegal, y por tanto igualmente ilegal es la presunta notificación de 19 de marzo del 2003. (...)”.

Por su parte, en la contestación de demanda de nulidad, visible a partir de la foja ciento sesenta y siete del expediente ordinario, las autoridades demandadas argumentaron al respecto que *“... en cuanto a que el citatorio fue dirigido a [REDACTED], por lo que debió requerir la presencia del destinatario y no del representante legal, es de manifestar que sus argumentos son infundados, debido a que como esa Sala podrá advertir del escrito por el cual presentó el recurso de revocación, el promovente indicó como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones la casa marcada con el No. [REDACTED] de la calle de [REDACTED], Col. [REDACTED] en [REDACTED], en ese sentido, si el propio actor indicó en su promoción cuál iba a ser su domicilio procesal es inaudito que en él estuviera presente [REDACTED] al no ser éste su domicilio fiscal, por lo tanto, al no encontrarse se tenía que buscar a su representante legal situación que quedó circunstanciada en el citatorio y acta de notificación”.*

Así, en la parte conducente de la sentencia recurrida, la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa estimó que la demanda de nulidad había sido presentada en tiempo, en tanto que estimó que la notificación de la resolución impugnada, al haberse requerido en su diligencia la presencia del representante legal y no la del destinatario directo ([REDACTED]),

resultaba violatoria del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, pues éste exige que el notificador solicite expresamente la presencia del interesado al constituirse en el domicilio correspondiente; máxime si en el caso se trata de una persona física, respecto de la que no se acredita que tenga representante legal.

A partir de lo hasta aquí expuesto, es inconcuso que la Sala del conocimiento sí atendió al argumento a que se hace mención en el agravio en estudio, toda vez que, al emitir la sentencia fiscal, si bien no hizo una referencia específica de dicho argumento, lo cierto es que sí fue desestimado a través de su pronunciamiento en el sentido de que el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación exige el requerimiento expreso de la presencia del destinatario del acto de autoridad al practicarse la notificación personal respectiva en el domicilio designado para recibir notificaciones, lo que revela que, bajo la consideración de la Sala a quo, resulta irrelevante que la notificación se hubiere practicado en un supuesto "domicilio procesal" y no en el "fiscal", pues la indicada disposición no establece dicha situación como hipótesis de excepción a lo que prevé, es decir, a la obligación del notificador de requerir la presencia del directamente interesado.

Por tanto, es evidente que la actuación de la Sala fiscal denota un análisis no sólo del acto impugnado a la luz del concepto de nulidad que se esgrimió, sino también del argumento que se expuso al respecto en el escrito de contestación de demanda, puesto que, la sentencia recurrida resolvió la litis planteada en términos del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, que se ciñó, en un primer aspecto, a la legalidad de la notificación de la resolución



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA-55
R.F. 5/2007

impugnada, al analizar de manera integral los argumentos que se expusieron tanto en la demanda de nulidad como en su contestación.

En diverso agravio, la autoridad recurrente señala que la sentencia fiscal es ilegal y contraria al artículo 192 de la Ley de Amparo, toda vez que, contrariamente a lo sostenido por la Sala del conocimiento, la notificación de la resolución impugnada sí satisfizo los requisitos previstos en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, interpretados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la jurisprudencia 40/2006 con rubro **"NOTIFICACIÓN PERSONAL. EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER LAS FORMALIDADES PARA SU PRÁCTICA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA"**; toda vez que ni en el indicado precepto legal ni en la citada jurisprudencia se estableció como presupuesto de legalidad de las notificaciones personales el "requerimiento de la presencia de la persona a quien se busca", es decir, del destinatario del acto de autoridad de que se trate, pues lo único que se exige es que se precise el motivo por el que no se entendió la diligencia con éste, lo que sí aconteció en el caso concreto.

Es **infundado** el concepto de agravio en comento, toda vez que, en oposición a lo expuesto por la recurrente, la normatividad aplicable a las notificaciones personales en materia fiscal, sí exige que, al diligenciarse, se requiera la presencia del directamente interesado, por lo que tratándose de personas físicas, es su presencia la que debe solicitarse.

A efecto de demostrar la anterior afirmación, debe atenderse al contenido de los artículos 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación que, en lo conducente, establecen:

“Artículo 136. Las notificaciones podrán hacerse en las oficinas de las autoridades fiscales, si las personas a quienes debe notificarse se presentan en las mismas. También se podrán efectuar en el último domicilio que el interesado haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes, salvo que hubiere designado otro para recibir notificaciones al iniciar alguna instancia o en el curso de un procedimiento administrativo, tratándose de las actuaciones relacionadas con el trámite o resolución de los mismos. (...)”.

“Artículo 137. Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a notificarse, dentro del plazo de seis días, a las oficinas de las autoridades fiscales. Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, el citatorio será siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. (...)”.

Precepto que ha sido interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia 40/2006, publicada en el Semanario Judicial de

la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, abril de dos mil seis, página doscientos seis, que a la letra dice:

“NOTIFICACIÓN PERSONAL. EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER LAS FORMALIDADES PARA SU PRÁCTICA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La práctica de toda notificación tiene como finalidad hacer del conocimiento al destinatario el acto de autoridad que debe cumplir, para estar en condiciones de dar oportuna respuesta en defensa de sus intereses. En ese sentido, el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación cumple con dicha exigencia y satisface la formalidad que para ese tipo de actos requiere la Constitución Federal, pues cuando su segundo párrafo alude a las notificaciones de los actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, sólo lo hace para diferenciarlas de las notificaciones en general, en cuanto a que en aquéllas el citatorio será siempre para que la persona buscada espere a una hora fija del día hábil siguiente y nunca, como sucede con las que deben practicarse fuera de ese procedimiento, para que quien se busca acuda a notificarse a las oficinas de las autoridades fiscales dentro del plazo de seis días. Ahora bien, del contenido íntegro del citado precepto se advierte que el notificador debe constituirse en el domicilio de la persona para la práctica de la notificación personal y, en caso de no encontrarla, le dejará citatorio para que lo espere a una hora fija del día hábil siguiente, de ahí que aun cuando su primer párrafo no alude expresamente al levantamiento del acta circunstanciada donde se asienten los hechos

respectivos, ello deriva tácita y lógicamente del propio precepto, ya que debe notificarse personalmente al destinatario en su domicilio, por lo que en la constancia de notificación deberá constar quién es la persona que se busca y cuál es su domicilio; en su caso, por qué no pudo practicarse; quién atendió la diligencia y a quién le dejó el citatorio; datos ineludibles que aunque expresamente no se consignen en la ley, la redacción del propio artículo 137 los contempla tácitamente. Además, la adición y reforma a los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 28 de diciembre de 1989, ponen de manifiesto que las formalidades de dicha notificación no son exclusivas del procedimiento administrativo de ejecución, pues las propias reglas generales de la notificación de los actos administrativos prevén que cualquier diligencia de esa naturaleza pueda hacerse por medio de **instructivo, siempre y cuando quien se encuentre en el domicilio, o en su caso, un vecino, se nieguen a recibir la notificación, y previa la satisfacción de las formalidades que el segundo párrafo del artículo mencionado establece. En consecuencia, el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, al señalar las formalidades para la práctica de la notificación personal que prevé, no viola la garantía de seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**".

De la lectura integral de las disposiciones y tesis jurisprudencial aquí reproducidas, se advierte que en la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

práctica de las notificaciones, los notificadores están obligados a constituirse en el domicilio designado por el contribuyente interesado en busca de éste y, en caso de no encontrarlo, le dejará citatorio para que lo espere en un día y hora determinados, debiéndose constituir nuevamente en su búsqueda; situación que revela lógicamente que el indicado funcionario debe requerir expresamente la presencia de dicho interesado y no de alguna otra persona, en tanto que la diligencia debe intentarse hacer directamente con el destinatario de la notificación, y sólo en caso de que éste no se encuentre, podrá entenderse con otro individuo.

Ciertamente, el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, al disponer que si ***“el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio”***, pone de manifiesto que en el desarrollo de la diligencia debe requerirse la presencia del directamente interesado, es decir, de la persona a la que se encuentra dirigido el acto de autoridad, pues resulta condición indispensable su ausencia para que sea factible la expedición del citatorio respectivo; y al constituirse por segunda ocasión, el notificador también debe solicitar la presencia del contribuyente interesado, y sólo en caso de no encontrarse podrá practicar la diligencia con cualquiera que se encuentre en el domicilio.

Cabe precisar que el artículo referido en el párrafo precedente, al establecer en su segundo párrafo la obligación del interesado o de ***“su representante legal”*** de esperar al notificador por virtud de la expedición del citatorio, se refiere a aquellos casos en que la persona que deba ser notificada sólo pueda obrar por medio de algún ente de representación, como sería el caso de las personas morales que, al tratarse de entidades ficticias, requieren de una persona física que

ejerza su representación, de conformidad con el artículo 27 del Código Civil Federal que señala que *"las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos"*.

Empero, no puede entenderse que tal disposición abarca a las personas físicas con capacidad legal, toda vez que éstas sí pueden obrar por sí y, por tanto, pueden recibir las notificaciones de las que son destinatarios de manera directa, por lo que es su presencia la que debe requerirse expresamente por el notificador.

Pues bien, debe puntualizarse que el acto impugnado en el juicio de nulidad del que deviene este asunto se hizo consistir en la resolución de veintiuno de febrero de dos mil tres, a través del cual la Titular de la Administración Local Jurídica de Cuernavaca del Sistema de Administración Tributaria declara infundado el recurso de revocación interpuesto en contra de la diversa resolución de tres de julio del dos mil dos, por virtud de la cual el Administrador Local de Auditoría Fiscal de Cuernavaca determinó a [REDACTED] un crédito fiscal equivalente a \$103,409.53 (ciento tres mil cuatrocientos nueve pesos 53/100 moneda nacional) por concepto de incumplimiento de obligaciones en materia de impuesto sobre la renta, correspondientes al ejercicio de dos mil. Asimismo, es conveniente reproducir el citatorio y el acta relativos a la notificación de la indicada resolución impugnada, que obran glosados a fojas sesenta y sesenta y uno del expediente ordinario, y que dicen:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMAA-55
R.F. 5/2007

“C. [REDACTED], R.F.C. [REDACTED]
[REDACTED], Col. [REDACTED]
[REDACTED] C.P. [REDACTED]. En [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] a los veintiocho días del mes de marzo de
2003, siendo las trece hrs., con veinte minutos me
constituí en su domicilio ubicado en la calle [REDACTED]
[REDACTED] con número exterior [REDACTED] Col.
[REDACTED], C.P. [REDACTED]. Cerciorado de ser su
domicilio, de acuerdo con el nombre y número de la
calle, y habiendo constatado con [REDACTED]
[REDACTED] persona con la que se entiende la diligencia y
ésta haber manifestado que es correcto el domicilio,
requerí la presencia del representante legal para
llevar a cabo una diligencia de carácter
administrativo con relación a la resolución contenida
en el oficio número 325-SAT-17-04-0908 de fecha 21
de febrero de 2003, emitido por Admón. Local
Jurídico de Cuernavaca, a través de la cual se emite
resolución. Al no haberlo encontrado a usted ni a su
representante legal, con fundamento en el artículo
137 del Código Fiscal de la Federación, dejo el
presente citatorio en poder de [REDACTED]
[REDACTED] quien dijo ser asistente del contribuyente, quien
(si) o (no) se identifica con credencial de elector para
que me espere en este domicilio el día diecinueve del
mes de marzo, de 2003, a las nueve hrs., con cero,
minutos, a efecto de practicar la diligencia antes
citada. Se le hace saber que en caso de no estar
presente en la hora y fecha indicada anteriormente,
se practicará la diligencia respectivas con quien se
encuentre presente en su domicilio, conforme a lo

previsto en el mencionado artículo 137 del Código Fiscal de la Federación”.

“C. [REDACTED], R.F.C. [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], Col. [REDACTED]
[REDACTED], C.P. [REDACTED]. Datos del documento a notificar:
Documento a notificar: 325-SAT-17-04-0908. Fecha de
emisión: 21 de febrero de 2003. Autoridad emisora:
Admón. Local Jurídica de Cuernavaca. En la ciudad
de México Distrito Federal, a los diecinueve días del
mes de marzo de 2003, siendo las nueve hrs., con
cero minutos, me constituí en el domicilio ubicado en
la calle [REDACTED] con número
exterior [REDACTED] Col. [REDACTED], C.P. [REDACTED]
Cerciorado de ser su domicilio de acuerdo con el
nombre y número de la calle, y habiendo constatado
con [REDACTED] persona con la que se
entiende la diligencia y ésta haber manifestado que
es correcto el domicilio, y habiendo requerido
nuevamente la presencia del representante legal,
según citatorio del día dieciocho de marzo de 2003,
que dejé en poder de [REDACTED] se me
informa que no se encuentra por lo que al no haberse
encontrado presente dicho representante procedo a
notificarle la resolución cuyos datos se han detallado
en el preámbulo de la presente acta, a [REDACTED]
[REDACTED], quién se identifica con credencial de
elector, entregándole la resolución en original con
firma autógrafa del funcionario que la emitió y que
consta de veinticinco fojas útiles. Con lo anterior se
da por terminada la presente diligencia, practicada en
relación con el oficio 325-SAT-09-17-04-0908 descrito
al inicio de la presente, firmando al margen o al calce

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
SEGUNDO TRIENIO
EN MATERIA
DEL FISCAL

designado para tal efecto, era lógico que en él no se iba a encontrar al contribuyente, por lo que resulta atinado que se hubiere requerido la presencia de su representante legal, cumpliéndose con el requisito de "requerir", sin que adquiera relevancia el hecho de que el destinatario de la resolución impugnada sea una persona física.

Ciertamente, el artículo 136 del Código Fiscal de la Federación establece que, cuando exista un domicilio designado por el actor en una instancia, los actos de ésta derivados deben notificarse en dicho domicilio; mientras que el artículo 137 del mismo ordenamiento prevé que, al practicarse las notificaciones personales, debe requerirse la presencia del directamente interesado, sin que se advierta algún supuesto de excepción.

Así, de la interpretación conjunta de ambos preceptos se llega a la conclusión de que, aun cuando el domicilio en el que se practique la notificación sea el designado como procesal por la persona interesada, es necesario que el notificador, al desarrollar la diligencia, requiera de manera expresa la presencia de la persona a notificar y no de alguna otra -como lo sería su representante legal tratándose de personas físicas-, y lo asiente en el acta circunstanciada respectiva, toda vez que tal situación constituye un requisito de legalidad de toda notificación, pues éstas tienen como finalidad hacer del conocimiento del destinatario del acto de autoridad, su contenido.

En tal virtud, la razón expuesta por la autoridad recurrente en cuanto a que el domicilio en que se efectuó la notificación era el procesal y no el fiscal, no justifica el vicio destacado de la notificación relativa a la resolución



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

impugnada en el juicio de nulidad del que deviene este asunto, en tanto que no basta que en el desarrollo de la diligencia se requiera la presencia de cualquier persona, sino que, se insiste, es indispensable que se solicite la presencia del destinatario de la notificación; máxime si la autoridad recurrente no argumentó en el juicio fiscal ni en la presente instancia que, durante la sustanciación del recurso de revocación de origen, el actor hubiere designado a alguna persona como representante legal, que permitiera su búsqueda y no la del directamente interesado en la diligencia en comento.

Por otra parte, la inconforme manifiesta que la sentencia recurrida es ilegal, toda vez que la Sala del conocimiento indebidamente sostuvo que la notificación de la resolución impugnada se practicó en contravención al artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, pues, en oposición a su dicho, en la diligencia respectiva, sí se requirió la presencia del destinatario del acto de autoridad, siendo que el hecho de que en el citatorio y acta respectivos se hubiera asentado que se requirió la presencia de su representante legal, no afecta su legalidad, pues ***“se trató de la misma persona”***, por lo que resulta evidente que dicha situación obedeció a un mero error.

Además, la recurrente aduce que en la parte superior del citatorio respectivo se asentaron los datos del directamente interesado, por lo que resultó evidente que la presencia que se requería era la de él, habida cuenta que dicha constancia debe ser apreciada como un todo, de conformidad con los criterios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con rubro ***“ACTAS DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.”***

DEBEN CONSIDERARSE COMO UN TODO Y NO SÓLO ATENDER A PARTE DE ELLAS PARA PRETENDER DEMOSTRAR SU ILEGALIDAD” y “SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL ,DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU CONTENIDO Y FINALIDAD EN RELACIÓN CON LA PRETENSIÓN DEDUCIDA”.

Es infundado el agravio aquí sintetizado, toda vez que el hecho de que al practicarse la notificación de la resolución impugnada no se hubiere requerido la presencia del interesado directo sino de su representante legal, implica una transgresión al artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, como se demuestra a continuación:

Debe reiterarse que el indicado precepto exige que, al diligenciarse las notificaciones personales en materia fiscal, se requiera a la persona destinataria del acto de autoridad de que se trate, lo que deberá hacerse constar en el acta circunstanciada donde se asienten todos los hechos relativos a tal actuación, pues aun cuando el indicado artículo no alude expresamente a ella, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido a través de la jurisprudencia 40/2006 transcrita en párrafos precedentes, que su levantamiento deriva tácita y lógicamente del contenido de la norma.

En efecto, como parte de las formalidades relativas a la práctica de notificaciones personales, el notificador debe levantar un acta pormenorizada de la diligencia, en la que deben describirse los hechos que se susciten en su desarrollo, a efecto de que exista certeza de que se cumplieron con los requisitos que al efecto prevé el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación; lo que revela que el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

54
FORMA A-55

R.F. 5/2007

contenido de dicha acta constituye el documento con el que se demuestran las condiciones en las que se desarrolló efectivamente la diligencia y, por tanto, deben presumirse verídicos los hechos en ella relatados.

Pues bien, de una lectura integral del citatorio y del acta de notificación relativos al acto impugnado en el juicio de nulidad del que deriva este asunto, se advierte que el notificador hizo constar que, al constituirse en el domicilio respectivo tanto en la primera ocasión como en la segunda, requirió la presencia del representante legal de [REDACTED], el cual no fue encontrado, por lo que se entendió la diligencia con [REDACTED] y se tuvo por efectuada la notificación.

Así, resulta evidente que, como lo resolvió la Sala fiscal, los elementos que obran en autos, específicamente el citatorio y el acta referidos en el párrafo precedente, ponen de manifiesto que la notificación de la resolución impugnada no se practicó en términos de ley, en tanto que el notificador no requirió la presencia de la persona directamente interesada, esto es, de [REDACTED], sino que solicitó el apersonamiento de su representante legal, siendo que indiscutiblemente se trata de dos personas distintas.

En tal virtud, el hecho de que la presencia requerida hubiere sido la de una persona diferente al interesado directo, implica la ilegalidad de la diligencia, pues es inconcuso que sólo se tiene certeza de que en el domicilio en donde se practicó la diligencia no se encontraba el representante legal, pero no de la ausencia del destinatario de la notificación, que, como se ha expuesto, es con quien debió intentarse su desarrollo.

Cabe precisar que la afirmación de la recurrente en el sentido de que el señalamiento expuesto en las constancias de notificación en cuanto a que se requirió la presencia del representante legal del interesado, obedeció a un mero error de redacción, es insuficiente para estimar la legalidad de la diligencia, habida cuenta de que se trata de una simple manifestación que no se demuestra con elemento alguno, máxime si, se insiste, el contenido de dichas constancias debe presumirse verdadero.

De igual forma, es irrelevante que en la parte superior del citatorio y del acta de notificación se hubieren asentado correctamente los datos de la persona que debía notificarse, en tanto que lo que demuestra las circunstancias en las que se desarrolló la diligencia, es el relato de los hechos en ella suscitados, por lo que, al haber asentado expresamente el notificador que *“requerí la presencia del representante legal”* a la persona con las que se entendió la diligencia debe estimarse que así sucedió, por lo que no existen elementos que revelen que esta persona hubiere entendido que la presencia que se requería era la del contribuyente interesado y no la de su representante legal.

Aunado a lo anterior, es conveniente apuntar que no resultan aplicables para la solución de este asunto, las tesis que la recurrente dice fueron pronunciadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tanto que, independientemente de la veracidad de su afirmación y del sentido de esos criterios, su contenido no vincula a este tribunal, pues en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, sólo la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pronunciada en Pleno o en salas,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

tiene carácter obligatorio para los tribunales colegiados de circuito.

Por tanto, debe concluirse que en autos no quedó acreditado que, al efectuarse la notificación de la resolución impugnada, se hubiere solicitado la presencia del interesado directo, lo que revela una transgresión al artículo 137 del Código Fiscal de la Federación.

En estas condiciones, debe desestimarse también el diverso agravio, en el que la autoridad inconforme aduce que la sentencia de nulidad es ilegal, toda vez que la Sala fiscal, al estimar violatoria del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación la notificación de la resolución impugnada, soslayó que, por lo demás, se cumplieron con los requisitos establecidos en la jurisprudencia 40/2006 referida en párrafos precedentes, toda vez que en el citatorio y acta respectivos se asentó el domicilio designado para recibir notificaciones, las razones por las que no se practicó la diligencia con la persona cuya presencia fue requerida, y el nombre de la persona a quien se dejó el citatorio y con la que se entendió la actuación.

En efecto, como se ha expuesto a lo largo del presente considerando, la notificaciones personales en materia fiscal están reguladas por el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, que establece los lineamientos que deben de seguirse en su práctica y, por ende, los requisitos de su legalidad.

Así, resulta evidente que dichas actuaciones deben satisfacer cada una de las exigencias a que se refiere el precepto legal en comento, en tanto que su legalidad depende de la plena satisfacción de las formalidades en él

previstas, por lo que la ausencia de cualquiera de ellas provoca que se tengan como indebidamente practicadas.

En tal virtud, sin prejuzgar sobre la veracidad de las afirmaciones de la recurrente en el sentido de que en el citatorio y acta relativos a la notificación de la resolución impugnada en el juicio de nulidad del que deviene este asunto, se asentó el domicilio designado para recibir notificaciones, las razones por las que no se practicó la diligencia con la persona cuya presencia fue requerida, y el nombre de la persona a quien se dejó el citatorio y con la que se entendió la actuación, lo cierto es que basta el vicio destacado en párrafos precedentes, esto es, que el notificador, al constituirse en el domicilio respectivo, no requirió la presencia del directamente interesado, para estimar que la notificación no cumplió con su finalidad de comunicar el contenido del acto de autoridad a su destinatario y, por tanto, para estimar su ilegalidad.

Luego, resulta irrelevante si satisficieron o no el resto de los requisitos que prevé el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, interpretado en términos de la jurisprudencia 40/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro ***"NOTIFICACIÓN PERSONAL. EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER LAS FORMALIDADES PARA SU PRÁCTICA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA"***.

SÉPTIMO. En diverso agravio, la recurrente manifiesta que la sentencia combatida es violatoria de los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que, contrariamente a lo sostenido por la Sala del conocimiento,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

en la resolución de origen no era necesario invocar alguna de las causales previstas en el artículo 55 del mismo ordenamiento legal, toda vez que a través de ella se determinaron ingresos brutos del contribuyente a través de información requerida a un tercero, con base en el artículo 56 fracción III, del propio cuerpo legal, sin que este precepto establezca como condición de su aplicación la actualización de alguno de los supuestos establecidos en el indicado artículo 55, por lo que dicha facultad discrecional puede ejercerse de manera autónoma.

Además, la inconforme señala que la actualización del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación tampoco queda supeditada a la aplicación del citado artículo 55 del indicado ordenamiento, en tanto que tales preceptos regulan distintas formas de determinación presuntiva, por lo que pueden aplicarse de manera independiente por las autoridades fiscales, habida cuenta que lo que implica la segunda de las disposiciones en comento es el cálculo de una estimación del valor de las utilidades, actos, actividades o ingresos de un contribuyente, mientras que la primera disposición en mención sólo establece que la autoridad exactora, al ejercer sus facultades de comprobación, presumirá que la existencia de determinados datos o documentos corresponde a operaciones del contribuyente y, por tanto, forman parte de sus ingresos, pero no implica una determinación basada en un cálculo aproximado, máxime si deriva de datos concretos aportados por el gobernado y, en su caso, da lugar a una determinación precisa.

Es parcialmente fundado el agravio aquí sintetizado, en atención a las consideraciones que se esgrimen a continuación:

Debe reiterarse que el acto impugnado en el juicio de nulidad del que deviene este asunto se hizo consistir en la resolución de veintiuno de febrero de dos mil tres, a través de la cual la Titular de la Administración Local Jurídica de Cuernavaca del Sistema de Administración Tributaria declara infundado el recurso de revocación interpuesto en contra de la diversa resolución de tres de julio del dos mil dos, por virtud de la cual el Administrador Local de Auditoría Fiscal de Cuernavaca determinó a [REDACTED] un crédito fiscal equivalente a \$103,409.53 (ciento tres mil cuatrocientos nueve pesos 53/100 moneda nacional) por concepto de incumplimiento de obligaciones en materia de impuesto sobre la renta, correspondientes al ejercicio de dos mil; siendo conveniente atender al contenido de este último fallo, que obra glosado a fojas noventa y cinco y siguientes del expediente de nulidad y que, en lo conducente, señala:

"(...) 1. INGRESOS.- A folios números [REDACTED] y [REDACTED] del acta final se hizo constar, que de la revisión practicada a las declaraciones presentadas, libro de ingresos, estados de cuenta bancarios de los meses de enero a diciembre de 2000, y notas de venta por los meses de agosto a diciembre de 2000, así como de la aportación de datos por terceros, se conoció que el contribuyente visitado omitió declarar ingresos para efectos del impuesto sobre la renta, en suma de \$2'019,675.22, los cuales se determinaron como sigue: '(se reproduce)' (...) 2.- INGRESOS POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD. La cantidad de \$848,675.22, por concepto de depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55
R.F. 5/2007

se conocieron de la revisión practicada al libro de ingresos, y a la cuenta bancaria número [REDACTED] del [REDACTED], abierta a nombre de [REDACTED] los cuales no se encuentran registrados en su contabilidad, dicha cantidad se integra mensual y semestralmente como sigue: '(se reproduce). (...) Del estudio realizado a los argumentos vertidos por el contribuyente visitado mediante su escrito, se considera que éstos resultan insuficientes para aclarar el origen de dichos ingresos, toda vez que no proporcionó la documentación fehaciente que respaldara el origen los depósitos bancarios en suma de \$848,675.22, misma documentación que para que pudiera surtir efecto, tenía que coincidir con el importe y la fecha de cada depósito, situación que no ocurrió ya que no aportó prueba alguna que respaldaran sus argumentos. A mayor abundamiento el artículo 59 primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación, vigente señala, lo siguiente: '(transcribe)'. (...) 3.- INGRESOS DERIVADOS DE LA APORTACIÓN DE DATOS POR TERCEROS. La cantidad de \$1'171,000.00, corresponde a ingresos presuntos obtenidos de la información y documentación proporcionada en la visita domiciliar de aportación de datos por terceros practicada por esta autoridad en el ejercicio de las facultades de comprobación a la contribuyente [REDACTED], en relación con las operaciones que en su carácter de tercero llevó a cabo con [REDACTED] mediante oficio número 324-SAT-17-01-1557 de fecha 5 de marzo de 2002, girado por

Armando Ebodio Ramos Burguete, Administrador Local de Auditoría Fiscal de Cuernavaca, con sede en Cuernavaca en el Estado de Morelos, mediante el cual se ordenó la práctica de visita domiciliaria a la contribuyente [REDACTED] con relación a las operaciones que en su carácter de tercero llevó a cabo con el contribuyente [REDACTED] dentro del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2000; de donde se conoció que durante el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2000, los accionistas de la contribuyente [REDACTED] realizaron aportaciones para futuros aumentos de capital, dentro de las cuales se encuentran incluidas las aportaciones efectuadas por [REDACTED] en suma de \$1'171,000.00, según consta en la póliza de diario número 11-002 de fecha 30 de noviembre de 2000, en la que se encuentra el registro contable de la capitalización de dichas aportaciones, así como el acta de asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 3 de enero de 2001, en la que la contribuyente [REDACTED] acordó la capitalización de las aportaciones hechas para futuros aumentos de capital, en su parte variable, tal y como aparecen en la contabilidad al 31 de diciembre de 2000, quedando el capital variable según acta de asambleas como sigue: (se reproduce)'. (...) Cabe hacer mención que durante el desarrollo de la visita domiciliaria de aportación de datos por terceros, [REDACTED] en su carácter de tercero y Gerente Administrativo del [REDACTED], manifiesta que en relación a las aportaciones que efectuaron los



accionistas de esa empresa, la cantidad de \$1'171,000.00, corresponde a aportaciones realizadas por [REDACTED], mismas que fueron capitalizadas en el ejercicio de 2000, exhibiendo para tal efecto la póliza de diario 11-002 de fecha 30 de noviembre de 2000; relativo al registro contable de dicha capitalización; así como el acta general de asamblea ordinaria de accionistas de fecha 3 de enero de 2001, en la cual se acordó la capitalización de dichas aportaciones; hechos que constan a folios número 1577-8 y 1577-9 del acta de aportación de datos por terceros de fecha 8 de abril de 2002. A mayor abundamiento el artículo 56, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, señala que para la determinación presuntiva de los ingresos las autoridades fiscales calcularán los ingresos sobre los cuales proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, a partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tenga relación de negocios con el contribuyente. (...) En consecuencia esta Administración Local, procede a determinar el crédito fiscal como sigue: '(se transcribe)' ”.

Como puede advertirse de la anterior transcripción, el Administrador Local de Auditoría Fiscal de Cuernavaca, en el estado de Morelos, al emitir la resolución de origen derivada de la revisión de la situación fiscal de [REDACTED] correspondiente al ejercicio de dos mil, determinó la existencia de ingresos no declarados, derivados de dos partidas, a saber:

a) De ingresos por depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad, calculada de conformidad con el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.

b) De ingresos derivados de la aportación de datos por terceros, calculada en términos del artículo 56, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.

Así pues, a efecto de resolver la litis en el presente medio de impugnación, debe atenderse al contenido de los artículos 55, 56, fracción III, y 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación vigente en la fecha de la emisión de la resolución de origen, que dicen:

“Artículo 55. Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, el resultado fiscal en el régimen simplificado o el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sus ingresos, entradas y el valor de los actos, actividades o activos, por los que deban pagar contribuciones, cuando: I. Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales; u omitan presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que hayan transcurrido más de un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trate. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a aportaciones de seguridad social. II. No presenten los





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUNTA COORDINADORA
ADMINISTRATIVA
EN CIRCUITO

libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria de más del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones, o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales. III. Se dé alguna de las siguientes irregularidades: a). Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del costo, por más de 3% sobre los declarados en el ejercicio. b). Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. c). Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios, o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo, siempre que en ambos casos, el importe exceda del 3% del costo de los inventarios. IV. No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el procedimiento de control de los mismos, que establezcan las disposiciones fiscales. V. No se tengan en operación los equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal que hubiera autorizado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los destruyan, alteren o impidan el propósito para el que fueron instalados. VI. Se adviertan otras irregularidades en su contabilidad que imposibiliten el conocimiento de sus operaciones. La determinación presuntiva a que se refiere este artículo, procederá independientemente de las sanciones a que haya lugar”.

“Artículo 56. Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, sus entradas,

el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos: (...) III. A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente. (...)”.

“Artículo 59. Para la comprobación de los ingresos, o del valor de los actos, actividades o activos por los que se deban pagar contribuciones, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario: (...) III. Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones”.

Del estudio concatenado y sistemático de los artículos aquí reproducidos, se advierte que si bien todos se refieren a la determinación presuntiva de ingresos, lo cierto es que las hipótesis que prevén se refieren a dos distintas presunciones: una regulada por los artículos 55 y 56 y, otra, por el artículo 59.

En efecto, el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación estatuye la determinación presuntiva de la utilidad fiscal, por no contar la autoridad hacendaria con los elementos necesarios para su obtención precisa, al no serle proporcionada por el contribuyente la información correspondiente, lo que revela que, en términos generales, la hipótesis en comento requiere de una imposibilidad de dicha autoridad para conocer las operaciones y situación tributaria



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA-A-55

R.F. 5/2007

del gobernado. Así, ante dicha situación, las autoridades fiscales podrán calcular los ingresos de los contribuyentes sobre los que proceda el pago de impuestos, a través de los procedimientos que prevé el artículo 56 del propio Código Fiscal de la Federación.

Ciertamente, este último precepto legal sí tiene vinculación con el diverso 55 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que establece, en sus diversas fracciones, los métodos a partir de los cuales se pueden calcular los ingresos de los contribuyentes sobre los que debe pagarse algún tributo, a efecto de determinar de manera presunta su utilidad fiscal, sus ingresos, entradas y el valor de sus actos, actividades o activos, pues así se desprende de su contenido, específicamente al referir que ***“para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior...”***.

En tal virtud, resulta evidente que para la aplicación de alguno de los procedimientos a que se refiere el artículo 56 del Código Fiscal de la Federación, entre los que se encuentra el considerar la información requerida a terceros por las autoridades fiscales, es necesario que previamente se actualice alguno de los supuestos contenidos en las seis fracciones del artículo 55 del propio ordenamiento, en tanto que sólo así la autoridad fiscal estará en condiciones de determinar presuntivamente la utilidad fiscal sobre la que deban pagarse impuestos y, por tanto, de hacer uso de los indicados procedimientos.

Por su parte, el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación establece las presunciones que deben considerarse en el ejercicio de las facultades de

comprobación, y que implican que los documentos, la información contable y la correspondencia que se encuentra en poder del contribuyente, son operaciones realizadas por él y, por tanto, deben considerarse al revisar su situación fiscal.

Pero el surgimiento de estas presunciones no se origina en la falta de elementos para determinar la situación de los contribuyentes ni en la omisión de éstos de proporcionar a la autoridad fiscal la documentación e información necesaria, sino que únicamente se trata de situaciones específicas que, al actualizarse en el ejercicio de las facultades de revisión, hacen inferir que se encuentran relacionadas con la condición fiscal del gobernado.

Así, para la aplicación de alguno de los supuestos contenidos en el precepto en comento, entre los que se encuentra la presunción de que los depósitos en cuentas bancarias del contribuyente no registrados en su contabilidad forman parte de sus activos, no es necesaria la actualización de las hipótesis previstas en el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación.

A partir de lo hasta aquí expuesto, es inconcuso que la Sala del conocimiento resolvió correctamente al declarar la ilegalidad de las resoluciones impugnada y de origen en la parte en que se detectaron ingresos no declarados derivados de la aportación de datos por terceros, toda vez que, al haber ejercido la autoridad fiscal el procedimiento a que se refiere el artículo 56, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, era necesario que previamente se actualizara alguna de las hipótesis previstas en el artículo 55 del mismo cuerpo legal, toda vez que, como se ha visto, ambos preceptos se encuentran íntimamente vinculados.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55
R.F. 5/2007

En cambio, resulta erróneo el pronunciamiento de la Sala fiscal en cuanto estimó que la resolución de origen, al determinar los ingresos no declarados por depósitos bancarios que no corresponden a los registros de contabilidad del contribuyente, requería de la actualización de alguna de las hipótesis previstas en el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la fundamentación y motivación respectiva, toda vez que, en términos del estudio expuesto en párrafos precedente, se advierte que la aplicación del supuesto contenido en el artículo 59, fracción III, del mismo ordenamiento no implica una determinación presuntiva de utilidad fiscal, sino sólo la presunción de que los depósitos en cuentas bancarias del gobernado forman parte de su contabilidad, por lo que este último precepto puede ser aplicado de manera autónoma.



TRIBUNAL COORDINADO
FISCAL ADMINISTRATIVO
PRIMER CIRCUITO

Luego, debe concluirse que la sentencia recurrida resulta legal en un aspecto y, en otro, ilegal, toda vez que, se insiste, el artículo 56 del Código Fiscal de la Federación sí requiere la aplicación del artículo 55 del mismo ordenamiento, mientras que el artículo 59 prevé una hipótesis independiente.

En estas condiciones y dada la eficacia del agravio analizado en este considerando, **lo procedente es declarar parcialmente fundado el presente recurso** y devolver los autos a la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a efecto de que subsane el vicio destacado en este fallo y, hecho que sea, emita una nueva resolución con libertad de jurisdicción.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 248 del Código Fiscal de la Federación, y 37,

fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO. Es procedente y parcialmente fundado el recurso de revisión.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la Sala de su origen y, en su oportunidad, archívese este asunto.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Humberto Suárez Camacho (Presidente), Arturo Iturbe Rivas (Ponente) y María Antonieta Azuela de Ramírez, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Firman el Magistrado Presidente y el Magistrado Ponente, con la intervención de la Secretaria de Acuerdos quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE:


LIC. HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO.

MAGISTRADO PONENTE:


DR. ARTURO ITURBE RIVAS.

SECRETARIA DE ACUERDOS:


LIC. MA. LORENA GARCÍA GUTIÉRREZ.

ILV*gas.

EN 13 MAR 2007 SE DEVUELVE A LA SECRETARÍA DE ACUERDOS, EL PRESENTE EXPEDIENTE, DESPUES DE HABERSE ENGROSADO. LA SECRETARIA DE ACUERDOS: LIC. MARÍA LORENA GARCÍA GUTIÉRREZ.



Documento que se entrega:

Sentencia de 26 de abril de 2007 de la **Revisión Fiscal 5/2007**, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, fracción I, de la **Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública**; artículo 3, fracciones IX y X de la **Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados**; artículos 38, fracción I y 52 de los **Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas**; y artículos 19 y 20, primer párrafo, del **Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales**, se identificó que el documento antes descrito, contiene información **CONFIDENCIAL**.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 108, de la **Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, se expide la versión pública suprimiendo los siguientes datos

Dato testado
Quejoso (1)
Personas Mencionadas en Juicio (4)
Domicilio (1)
Cuenta bancaria (1)
Datos de identificación (2)